
HIPOTESIS SOBRE LOS APOYOS DE UN GOBIERNO SOCIALISTA

Jorge M. Reverte-Ludolfo Paramio



4

Las declaraciones del jefe del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, se suceden tajantes: no habrá elecciones anticipadas, la UCD completará el tiempo teórico de la legislatura gobernando en solitario. Por contra, los analistas políticos coinciden en señalar que las elecciones anticipadas habrán de celebrarse, a más tardar, durante el próximo otoño. El progresivo debilitamiento del gobierno, carente cada vez más de una base social imprescindible para poder olvidarse de la oposición, es día a día más evidente. La derrota de UCD en Galicia, y la muy previsible catástrofe electoral centrista en Andalucía, muestran un panorama muy poco halagüeño para los sueños hegemónicos del gobierno Calvo Sotelo.

Esta situación de debilitamiento progresivo, acompañada de la *normalización* militar, si es que ésta termina por lograrse, provocarán, una vez finaliza-

dos los juicios contra los implicados en el intento de golpe del 23 de febrero, una auténtica fiebre electoral en la que la UCD ha sido la primera en incurrir.

Para el partido socialista, la opción está muy clara en términos generales: debe afrontar los próximos meses con la conciencia de tener que sentar en los sillones del gobierno a sus militantes. La cuestión, por supuesto, se complica desde el momento en que es preciso elaborar una estrategia de llegada al gobierno y plantearse las diversas fórmulas que tal gobierno podría revestir.

Las encuestas

El primer elemento que se utiliza para medir la presunta fuerza electoral de una opción política son las encuestas de opinión. (Naturalmente tal método

sólo tiene sentido en un régimen democrático.) Y sucede que, tanto las realizadas por institutos independientes como las realizadas por las fuerzas de la

derecha o las elaboradas por encargo del PSOE, dan por hecho que la minoría mayoritaria en un próximo congreso de los diputados estaría en manos de los socialistas.

Esto, sin embargo, no quiere decir mucho por sí solo. El funcionamiento del sistema electoral español exige que se den determinadas circunstancias para que una ventaja en votos se plasme en una ventaja similar en escaños. En un reciente trabajo sobre este tema, publicado por Carlos Rodríguez y Ramón Aller en el número 58 de la revista *Tiempo*, se hacían los siguientes cálculos basados en una encuesta de opinión de fecha 12 de diciembre de 1981:

- Para el caso de celebrarse unas elecciones a las que acudiera cada partido político con sus propias siglas, sin que mediara la creación de nuevas fuerzas de importancia, el PSOE obtendría un 33,1 por 100 de los votos a los que corresponderían 144 escaños en el Parlamento. La UCD, con el 21,0 por 100, tendría

105 escaños. Alianza Popular 38 escaños, con el 11,4 por 100 de los sufragios. Al PCE le corresponderían 25 diputados para el 9,1 por 100 de los votos.

- En una segunda hipótesis extrema que supusiera la presentación de la derecha unida (UCD y AP con listas comunes) y la presentación de un partido «bisagra» como el PAD de Fernández Ordóñez, el panorama variaría sensiblemente. La fuerza de la derecha, sumados los votos, se plasmaría en un 32,6 por 100 a los que corresponderían un total de 169 diputados (26 más que en la hipótesis primera).

El partido socialista debe afrontar los próximos meses con la conciencia de tener que sentar en los sillones del gobierno a sus militantes.

- Por su parte, el PSOE obtendría un 31,4 por 100 de los votos y sólo 126 diputados (18 menos que en la primera hipótesis). Mientras que el PCE-PSUC no va-

riaría sustancialmente sus perspectivas, y el partido bisagra obtendría sólo 4 diputados con el 3,9 por ciento. Por su parte, las fuerzas nacionalistas verían restringido el número de sus representantes respecto de la primera posibilidad pasando de 38 a 27 diputados.

La fuerza del miedo

A la vista de estos datos la conclusión parece obvia: los socialistas deberían plantearse la presentación a las elecciones sin atender a la creación del llamado partido bisagra.

Ocurre, sin embargo, que tal decisión no es fácil de tomar. En primer lugar, porque no depende sólo del PSOE que tal fuerza intermedia pueda presentarse en solitario a las elecciones. Por otro lado, la situación general del país puede aconsejar que se apoye desde el partido socialista la creación de este partido y se anime su presencia pública para acceder al gobierno en condiciones de poder

ejercerlo con mayores posibilidades de tranquilidad.

Queda, por supuesto, una tercera posibilidad: la de que los candidatos del partido bisagra se presentaran en las listas del PSOE, no como independientes, sino como militantes de otra fuerza política, en una variante de la maniobra emprendida por la derecha según la segunda hipótesis. En tal caso, el número de diputados obtenido resultaría ligeramente superior a las expectativas primeras.

Y una cuarta, que seguiría dando ventaja a las listas de la derecha: que hubiera la presentación de dos grandes opciones, la gran derecha, mayoría natural enunciada por Fraga, y la opción de centroizquierda que contaría teóricamente con el apoyo externo de los comunistas.

Dentro de este panorama estrictamente teórico intervendrán otros elementos, sin embargo. El primero de ellos —no hay que olvidarlo— es que la derecha ha comenzado a jugar ya con el voto del miedo. Aún sin que los juicios a militares golpistas se hayan resuelto, y aún con el hecho aparente de que los cuarteles vuelven a la calma, desde el partido del gobierno y desde la derecha fraguista se hacen llamamientos para que la democracia pueda mantenerse evitando por todos los medios que un gobierno socialista lleve al país a la ruina.

Los centros de poder, como los empresarios afiliados a la CEOE y en cierta medida la Banca, han emprendido por su parte una campaña no menos abusiva para provocar el miedo. Si los socialistas vencen, la inversión bajará y se perderán más puestos de trabajo.

Nadie amenaza con emprender aventuras golpistas apoyándose en los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Pero detrás de las argumentaciones de todos estos sectores está siempre el fantasma de la desestabilización.

Esto supone, en términos inmediatos,

**La oferta socialista debe
contener elementos
diferenciadores para
despertar la convicción de que
es un voto para el cambio.**

la necesidad aparente de contar con apoyos que se encuentren a la derecha del PSOE para poder gobernar. Y lo que es más difícil de digerir para muchos militantes: la posibilidad franca de que haya que llegar a un entendimiento con la UCD para poder formar gobierno, con el consiguiente recorte en los programas socialistas. Un gobierno socialista monocolor es algo difícilmente pensable en estos momentos. Y un gobierno socialista reforzado con la presencia de independientes no hace variar mucho las perspectivas, porque lo que se necesitan son apoyos sociales importantes y conseguir que la oferta de gobierno no lleve a un enfrentamiento de envergadura (aunque sea soterrado) con los poderes financiero, militar y eclesiástico.

Así, la fiabilidad práctica de las encuestas puede que deba enfocarse desde una perspectiva doble: hay que conseguir el mayor número de diputados y el mayor número de apoyos posibles para plasmar una alternativa modestamente progresista. Pero también hay que tomar en cuenta que esos resultados pueden ser necesarios para obtener las mayores ventajas posibles en una probable negociación forzosa con fracciones de la derecha. Si la opción bisagra resta votos, el PSOE se enfrenta a una situación contradictoria en apariencia. No sólo por cuestiones de sumas y restas, sino porque la oferta socialista debe, para ser creíble (y la credibilidad es la característica básica en unas elecciones generales), contener suficientes elementos diferenciadores para despertar en el electorado la convicción de que un voto por el socialismo es un voto para el cambio. Pero si se plantea la posibilidad de tener que gobernar con una parte de la derecha, este programa de cambios

tendría que ser muy recortado. Porque, en cualquier caso, lo que no puede hacer ninguna opción política sería cambiar los programas a los dos meses

de haber obtenido votos. La volubilidad se paga muy cara en política.

La derecha también sufre

Lejos de nuestro ánimo la intención de dar un negro panorama para las posibilidades de un gobierno socialista. Si la izquierda (y la izquierda pasa, lo quiera Carrillo o no, por lo que el PSOE decida) tiene ante sí una difícil situación que resolver, la tarea de la derecha no es menor. Y, además, es preciso tener en cuenta una lección histórica: la derecha también se equivoca. Los errores no son el exclusivo patrimonio de las fuerzas progresistas. Veamos esto.

Si se concluye de los análisis de las encuestas sobre la tendencia del voto que la opción más favorable para la derecha en su conjunto es la coalición, la *mayoría natural* de Fraga, esto no quiere decir que tal componenda sea sencilla de llevar a la práctica.

En primer lugar, porque le quedan a la UCD muchos conflictos que resolver, de los cuales no es el menor la situación de incógnita que Adolfo Suárez sigue

El PSOE ha acusado al gobierno de un pecado de incoherencia: el cambio político exigía la reconstrucción de un «solo» Estado.

provocando con su silencio político. El expresidente del gobierno no ha decidido aún si se incorporará a su partido para jugar a fondo la victoria centrista, si mantendrá su mutismo o bien optará por crear él mismo una fuerza bisagra. Y las encuestas realizadas por el partido del gobierno señalan que la opción suarista se llevaría un buen porcentaje de los votos que apoyan a la UCD. La recuperación del anterior jefe de gobierno es, por tanto, una necesidad política para Calvo Sotelo. Y Suárez sigue siendo un furibundo enemigo de un pacto de envergadura con Alianza Popular que pudiera comprometer su teoría del centro político.

A esta dificultad contribuye también la actitud ensobrecida del líder de Alianza Popular, eufórico después del

éxito en las elecciones gallegas. AP no pactaría con UCD a cambio de unas migajas, sino que exigiría parcelas de poder muy importantes. Es muy previsible que Fraga cediera la presidencia del gobierno gustosamente a Calvo Sotelo, pero el programa económico y el desarrollo del proceso de construcción del Estado sufrirían una conversión de carácter reaccionario que para nada favorecería en el futuro a la credibilidad democrática de la derecha española.

Las hipótesis contempladas por las encuestas conocidas no incluyen la posibilidad de que apareciera, provocada por la convergencia de AP y UCD, otra bisagra de diferente carácter a la encabezada por Fernández Ordóñez. De forma paradójica el panorama político se resolvería a través del arbitraje de Adolfo Suárez, un hombre al que muchos consideraron acabado.

Excluidos los factores de sorpresa como el enunciado anteriormente, es lícito pensar que la apuesta de la derecha tiene más inconvenientes si se inclina por la unión electoral: si los llamados barones de UCD se plantean la continuidad del centrismo como forma de

expresión política más favorable para los intereses de la derecha (a la cual han de convencer todavía, como lo demuestra el descarado apoyo que Alianza Popular recibe de los centros de poder económico), si se plantean esa continuidad, no pueden aceptar la posibilidad de un gobierno que acentuaría los conflictos sociales con la dudosa contrapartida de calmar a las tramas golpistas y la más que dudosa posibilidad de acabar con el fenómeno terrorista en Euskadi.

Incidentalmente cabe, llegados a este punto, señalar que la concepción rosóniana se muestra más eficaz que la fraguista en ambos campos. La práctica ha demostrado que el terrorismo pierde fuerza con una actividad paciente, que excluya la represión masiva e indiscriminada, y lo gana cuando esta represión

se produce. La experiencia parece también demostrar (véase la Operación Galaxia y el -presunto- intento de golpe de Estado que protagonizó el general Torres Rojas cuando mandaba la Brigada Paracaidista) que la negociación con los golpistas es el peor camino para calmar sus ánimos.

Un solo estado

Pero restringir el análisis a los parámetros anteriores no es muy eficaz. Los años de gobierno de la derecha deben servir también para que la izquierda aprenda algo sobre cómo debe gobernarse y qué pactos habrían de establecerse para obtener otros apoyos que establezcan un hipotético gobierno de mayoría socialista.

Desde el PSOE se ha acusado con razón al gobierno en varias ocasiones de un pecado de incoherencia: el cambio político iniciado en 1977 exigía la reconstrucción de un Estado, de un *sólo* Estado. Y desde la UCD se ha actuado en ocasiones con una perspectiva pragmática nacida del origen político de algunos de sus miembros más relevantes (Martín Villa, Rosón, Sancho Rof...), que ha tendido a olvidar la necesidad de los principios. Así, a cambio de apoyos en las multinacionales, de apoyos de las fuerzas de la derecha nacionalista, la UCD efectuó transacciones que obligaron a rectificaciones posteriores para reconducir el proceso de modo que no se consumara una posibilidad cierta: el debilitamiento del Estado, una de cuyas consecuencias inmediatas se habría plasmado sin duda en el enfrentamiento civil.

La UCD llegó a tales cesiones después de haber comprobado en propia carne lo costoso que era ignorar a fuerzas como el PNV durante el proceso constitucional. Los nacionalistas vascos han expresado en más de una ocasión

El PSOE deberá tender a reforzarse en su presencia territorial y a buscar los apoyos precisos en las nacionalidades.

que habrían votado favorablemente a la Constitución si se les hubiera considerado durante las negociaciones.

Ante esta postura pragmática, y sus correspondientes bandazos políticos, el PSOE tendió a constituirse como la fuerza política guardadora del Santo Grial del Estado único. Y, en consecuencia, en fundamental defensor de maniobras de rectificación como la LOAPA. Pero cabría considerar si no se ha producido un comportamiento erróneo en las formas. La LOAPA se pactó con el partido del gobierno, sin contar con las fuerzas mayoritarias ni minoritarias de derecha o de izquierda existentes en las dos nacionalidades históricas más problemáticas: Euskadi y Cataluña. La consecuencia de esta actitud tiene dos vertientes negativas: por un lado, ha servido para que los rivales electorales del PSOE puedan calificar al partido de «antinacionalista»; por otro, le ha restado posibles apoyos que en un futuro no lejano podrían ser necesarios.

Esto es especialmente importante si se analiza nuevamente el período de gobierno de la derecha y las raíces de su deterioro. Y no sólo de la derecha, sino del propio PSOE. Los resultados de las elecciones realizadas en las nacionalidades mencionadas han marcado un (¿fatal?) deslizamiento de las fuerzas estatales hacia posiciones minoritarias. El PSOE no padece ese trauma de forma tan espectacular como la UCD, y, sobre todo, posee una fuerza en Andalucía que está en proceso de crecimiento. Pero la situación en Cataluña y Euskadi es preocupante.

Si se considera que las razones básicas de la crisis del gobierno (que llevarán a las elecciones anticipadas si existe la lógica política y si se registra un alto en los intentos golpistas) están en la menguante capacidad de gobernar de UCD por causa de su ausencia casi física en numerosos puntos del territorio, habrá que concluir que el PSOE deberá tender

a reforzarse en su presencia territorial y a buscar los apoyos políticos precisos en las nacionalidades para no verse desplazado como si el gobierno fuera un poder colonial con embajadas en las nacionalidades.

Desde esta perspectiva, es indudable que el PSOE debe defender sin complejos su concepción del Estado, pero también que tal concepción es compatible con un proceso de entendimiento con quienes poseen la legitimidad de la representación. Cabe llevar más allá el razonamiento y preguntarse si tal actitud negociadora estaría reñida en algunos casos con una negociación con aquellas formaciones políticas que se encuentran más cerca ideológicamente de la opción representada por el PSOE. Es de nuevo una situación contradictoria que se pacte la cuestión nacional con la UCD y se desplace del acuerdo a fuerzas de izquierda representadas en las nacionali-

dades. Tal proceso negociador no tiene por qué estar reñido con el mantenimiento de una alternativa diferenciada socialista ni con el mantenimiento de la concepción del Estado que el PSOE sostiene.

Lo contrario puede tener más inconvenientes que ventajas: pérdida de credibilidad por identificación con actitudes centralistas, y pérdida de credibilidad por preferencia de los acuerdos con formaciones políticas de la derecha.

Argumentos que exigen una mayor meditación si se está de acuerdo en considerar que la democracia correría más riesgos con la desaparición o el paso a segundo plano de los partidos estatales que con el afianzamiento legal pero impuesto por la fuerza del voto estatal de una estructura orgánica de la que no se corresponsabilizaran los partidos nacionalistas.